

EL ENFRENTAMIENTO BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO- GOBIERNO EN EL MES DE MAYO

El espacio político de El Salvador ha estado ocupado durante el mes de mayo por el enfrentamiento continuado del BPR y del Gobierno (cfr. Crónica del mes en este mismo número). La secuencia de los hechos permite sacar hipotéticamente una ley histórica, por lo que toca a esta ola de violencia. Esta ley hipotética tiene los siguientes elementos: a) la violencia que hace el BPR no es en principio violencia ofensiva sangrienta sino que se centra en otro tipo de acciones, tales como toma de embajadas e Iglesias, manifestaciones, quemas de buses, de tractores, comunicados, etc. b) este tipo de acciones se toma con frecuencia como respuesta a ataques violentos que se les hace, aunque también como forma de lucha reivindicativa y concientizadora, lo cual se ve con mayor claridad en el caso de las huelgas; c) completamente distintas son las acciones de las FPL, las cuales sí tienen como método habitual el dar muerte; d) incluso las muertes causadas por las FPL son predominantemente respuesta a las violencias mortales causadas sobre miembros del BPR; e) en los últimos días y tras el estado de sitio ha comenzado el asesinato sistemático de miembros de las organizaciones populares, al parecer, por parte de bandas de extrema derecha.

No es el propósito de este comentario hacer un juicio ético sobre esta secuencia de hechos. Es clara la posición de nuestra revista en la condena de la violencia, condena que la entendemos fundamentalmente en los mismos términos de la Carta Pastoral de Mons. Romero y Mons. Rivera sobre las organizaciones populares. Pero sí es el propósito del comentario mostrar las características estructurales del actual proceso de violencia, tal como las hemos apuntado en el párrafo anterior. Y esas características parecen indicar siquiera provisionalmente que las acciones del Bloque son fundamentalmente respuesta y que también son fundamentalmente respuesta, aunque de índole cualitativamente distinta, las acciones de las FPL. Nos parece que esta observación, si se ajusta completamente a los hechos, es de primera importancia a la hora de buscar remedio provisional y co-

yuntural a la espiral de la violencia.

Pero el comentario puede ir más adelante en el análisis y preguntarse si este enfrentamiento del BPR contra el Gobierno fue realmente programado, sea por parte del Bloque sea por parte de sus contrarios y oponentes. Por lo que toca al Bloque parece que la respuesta ha de ser negativa; fue más bien la marcha de los acontecimientos la que les forzó a tomar acciones, que pudieran estar dentro de una teoría general abstracta, pero que no habían sido previamente programadas. Probablemente la captura de cinco de sus dirigentes causó un trastorno emocional de grandes proporciones; a un golpe tan fuerte se vieron forzados a responder con toda su fuerza, sin prever las consecuencias que esa respuesta precipitada podría causarles. Por otro lado, su relativo triunfo en el desfile del primero de Mayo les hizo pensar que contaban con un gran apoyo popular, que podrían capitalizar para robustecer su organización y para golpear al Gobierno.

Esta falta de programación o, al menos, esta falta de programación bien calculada los llevó a una serie de acciones, cada vez más endurecidas, cuyas consecuencias son graves tanto para un proceso democratizador como también para una verdadera organización popular e incluso para el Bloque mismo.

Por lo que toca al proceso democratizador, puede afirmarse muy en general que la actividad de las distintas organizaciones populares junto con la actividad de los grupos guerrilleros, ha propiciado el que se sienta urgentemente en el país la necesidad de un proceso de democratización. No parece que pueda negarse esta contribución involuntaria de la extrema izquierda en sus distintas versiones al cambio que se ha experimentado en algunos sectores importantes del país, cambio que intentaría sacar a la nación del camino más radical de la seguridad nacional hacia un moderado camino de democratización. Pero la agudización de la violencia, agudización, a la que no es ajena la extrema derecha, sea programando acciones sea respondiendo inconsultamente a provocaciones, puso de nuevo las cosas al

borde de un giro del Gobierno hacia un punto sin retorno, simbolizado por el estado de sitio. Algunos hombres de la izquierda parecen olvidar que hay poderosas fuerzas en El Salvador a las que el actual Gobierno les parece débil y condescendiente con la subversión y de que aun contra toda la presión de los Estados Unidos y su campaña de los derechos humanos podría darse en nuestro país una tremenda agudización de la represión, en la cual los que más iban a sufrir son aquéllos que no están en la clandestinidad y que, sin embargo, luchan democráticamente por un cambio profundo de las estructuras. Los once muertos de ANDES caídos en estos días deberían abrir los ojos, a quienes buscan el crecimiento real de las organizaciones populares, como elemento esencial de la apertura democrática. Se dirá que este estado de cosas favorece el crecimiento de las actividades guerrilleras, pero en el mismo grado en que favorece esas actividades cierra las posibilidades para actividades de otro tipo de acción política.

Y este es el segundo aspecto de las consecuencias de los últimos enfrentamientos del Bloque con el Gobierno. Quienes se oponen a las organizaciones populares basan su rechazo en que las organizaciones son grupos subversivos, que pretenden cambiar violentamente el actual ordenamiento democrático, usan medios violentos y están en relación orgánica de dependencia con grupos terroristas, de modo que las muertes causadas por estos grupos son también atribuibles a las organizaciones populares. Analistas más agudos pueden pensar que estas acusaciones son simplistas y en su simplicidad poco obje-

tivas. Pero los hechos de los últimos días hacen todavía más difícil la aceptación de lo que pueda sonar a organización popular. En este sentido no ha habido en la serie de acciones y enfrentamientos un cálculo a larga distancia de lo más conveniente para un crecimiento progresivo, necesariamente lento y complejo. Qué deban ser y qué puedan hacer las organizaciones populares no es algo que pueda deducirse de teorías abstractas o de manuales internacionales sino algo que ha de irse construyendo en una praxis reflexiva, que dé máxima importancia a las condiciones objetivas, en que nos encontramos.

Finalmente el propio Bloque ha sufrido las consecuencias de sus acciones mal programadas. Han caído inutilmente cuadros importantes, ha cundido el temor y el desaliento entre sus filas, ha perdido imagen pública incluso entre las fuerzas progresistas. Han mostrado espontaneísmo y se han metido en problemas de difícil salida airosa, como en el caso de las Embajadas, en que incluso han tenido que contradecir sus principios de no asilo (por qué no cedieron antes, cuando eran muchos los que veían la inevitabilidad de su claudicación). Es posible que quieran autoengañarse hablando de que han puesto al Gobierno contra las cuerdas, de que han mostrado un gran heroísmo, de que han ganado la admiración de algunas gentes idealistas. Ciertamente no ha sido todo negativo. Pero a la hora del recuento final es bien posible que la cuenta tenga números rojos. Y no sería razonable excusarse del fondo perdido con la experiencia ganada. Un profundo ejercicio de autocrítica, en el que no dejen de escuchar a sus críticos, parece indispensable. Tal vez es hora de pensar que sucesos y errores como los de estos días no son



casuales. Las circunstancias han sido difíciles y se han presentado sin haber sido calculadas previamente. Pero los hechos parecen demostrar no sólo que no se está preparado estructuralmente para responder acertadamente a circunstancias graves imprevistas sino, más profundamente, que hay errores graves en los mismos planteamientos, que llevan connaturalmente a fallos importantes.

Por parte del otro polo del enfrentamiento —el Gobierno— pueden hacerse dos observaciones principales. La primera se funda en el hecho de que todo el proceso de violencia del mes de mayo se desató a partir de una serie de capturas ilegales, en las que no se midieron bien las consecuencias; no es pensable, en efecto que el Gobierno —otra cosa es lo que pudieran desear ciertas fuerzas extremistas de derechas a las que se les ha hecho el juego—, que ya estaba pensando en un amplio proceso de diálogo nacional, hubiese programado un baño de sangre en el que las víctimas suman cerca de un centenar. El Gobierno debe reconocer también que han sido las dos masacres de Catedral y de la Embajada de Venezuela las que han desatado la violentísima reacción que ha sufrido el país. El Gobierno está sintiendo estos días con el rechazo masivo del Foro Nacional cuáles han sido los costos reales de la aventura sangrienta en que le metieron.

La segunda observación hace referencia a la equivocada política del Gobierno respecto de las organizaciones populares. El fenómeno es sin duda complejo. Pero por lo mismo no se puede ser ante él ni ingenuo ni simplista. Pensar, por ejemplo, que el Bloque es la causa última o, al menos, la causa necesaria de la violencia actual en el país, de modo que

si se le hiciera desaparecer, desaparecería con él la violencia, sería confundir la parte con el todo y la superficie con el fondo. No parece, por otra parte, que la aniquilación sistemática de miembros del Bloque, tal como se viene dando desde días atrás, consiga la aniquilación o debilitamiento de las organizaciones populares. Las circunstancias objetivas del país y la altura de la conciencia colectiva permiten asegurar que, aun aniquilado el Bloque, volverá a surgir quien le sustituya.

El estado de sitio y el Foro Nacional pueden dar paso a un compás de espera, en donde deben darse profundas reflexiones, que ahonden en la verdad real de nuestra situación y en los primeros pasos de solución. La política nacional no se centra, desde luego, en el enfrentamiento Bloque-Gobierno y no debe ceñirse, en consecuencia, a buscar solución a este problema agudizado en el último mes. Aunque es un problema importante no es "el" problema actual de El Salvador, ni siquiera el aspecto más importante de un problema más general. Tiene sin duda su gravedad y debe tenerse en cuenta muy seriamente, pero hay que considerarlo dentro de una estrategia más general. Dejar su solución a grupos paramilitares terroristas es una respuesta inadmisible en un país civilizado y es una respuesta que nos causaría grandes trastornos en las relaciones internacionales, políticas y económicas; sería, además, una solución que rompe el ordenamiento constitucional y nos podría llevar a una prolongada guerra civil, que postergaría y haría cada vez más costosa la solución definitiva.

M.B.

